

# Boletim Gaúcho de Geografia

<http://seer.ufrgs.br/bgg>

---

## GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

*Salvador Maldonado Aranda*

*Boletim Gaúcho de Geografia, 40: 13-33, maio, 2013.*

Versão online disponível em:

<http://seer.ufrgs.br/bgg/article/view/39793>

---

Publicado por

## Associação dos Geógrafos Brasileiros

---



## Portal de Periódicos UFRGS

UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO GRANDE DO SUL

---

### Informações Adicionais

**Email:** [portoalegre@agb.org.br](mailto:portoalegre@agb.org.br)

**Políticas:** <http://seer.ufrgs.br/bgg/about/editorialPolicies#openAccessPolicy>

**Submissão:** <http://seer.ufrgs.br/bgg/about/submissions#onlineSubmissions>

**Diretrizes:** <http://seer.ufrgs.br/bgg/about/submissions#authorGuidelines>

---

Data de publicação - maio, 2013.

Associação Brasileira de Geógrafos, Seção Porto Alegre, Porto Alegre, RS, Brasil

# GEOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO: ENFRENTAR EL CRIMEN EN MEDIO DEL NARCOTRÁFICO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

SALVADOR MALDONADO ARANDA<sup>1</sup>

## RESUMEN

La guerra contra el narcotráfico que el gobierno panista emprendió desde diciembre de 2006 a la fecha tuvo como objetivo formal eliminar los cárteles de la droga y reducir la violencia criminal. Sin embargo, pese a los esfuerzos, los problemas siguen vigentes e incluso han aumentado considerablemente. Uno de los ámbitos poco investigados de esta lucha antidrogas es la forma en que se han reconfigurado las sociedades locales o comunidades insertas en problemas de narcotráfico y violencia criminal. Regularmente se analizan las historias de grandes cárteles y sus líderes, al mismo tiempo que se observan a los grupos ilegales por fuera de la sociedad, como agrupaciones que llegan a imponer su orden y deseos. El objetivo de este trabajo es indagar la manera en que se negocia la violencia y se enfrenta el crimen en algunas comunidades rurales, indígenas y ciudades michoacanas. Documentar estas negociaciones y la forma en que se produce el orden local puede ayudar a comprender parte de la “naturaleza” de la violencia que México está experimentando.

Palabras clave: Guerra al narcotráfico. Geografía de la violencia. Negociación. Orden local. Mexico

Después de varios meses de ausencia de trabajo de campo en la localidad rural Capulín, ubicada en el corazón de la Tierra Caliente de Michoacán, situada en el Occidente de México, el 30 de septiembre de 2011, llegamos<sup>2</sup> por la tarde a la casa del señor Ramiro y su esposa Estela. Don Ramiro estaba, como siempre, descansando de una larga jornada de trabajo en sus huertas de limones que tiene en calidad de ejido en las inmediaciones del poblado. Nos recibió con mucho gusto así como su esposa. En cuanto comenzamos a charlar sobre cómo les había ido, la plática casi automáticamente se centra en la violencia. No es causal, pues la región es una zona con grandes problemas de narcotráfico muy graves, con cárteles de la droga que han seguido luchando desde décadas contra la intervención de otros cárteles provenientes de otras regiones y contra el ejército y policía del Estado.

---

1 Doutor em Ciências Antropológicas, CONACYT - Colégio de Michoacán, México. email: maldonado@colmich.edu.mx

2 En ese entonces iba acompañado de una auxiliar de investigación del centro donde laboro, quien a resultado ser una persona central en mis investigaciones. Prefiere omitir su nombre.

Luego de la muerte de su nieto, meses antes de nuestro encuentro, nos platicaron el caso de una extorsión de que fueron objeto y la manera en que lograron sortear la violencia. Nos comenta Ramiro que un día estando en la huerta a donde se dirige cada día a trabajar (ya sea limpiando sus limoneros, sembrando maíz, etc.) recibió una llamada por celular de una persona. “Se presentó” como parte de una banda criminal Z o F (no se sabe realmente), pidiéndole dinero a cambio de no atacar contra su familia. Que tenían rodeada la casa y que matarían a toda su familia si no accedía a darles el dinero que solicitaban. Ramiro dice que en un principio estuvo tranquilo, escuchándolo, pero tan pronto como terminó, le dijo que él no les daría ni un centavo, que si querían que mataran a toda su familia, que ya habían vivido sus años y que por su parte no les daría ni un peso... “después no me los quito de encima... si les doy algo!”, exclamó entre nosotros. El extorsionador le volvió a comentar que se veía que era bravo pero que eso no iba a servir. Aun así ya tenían a su familia y que iba a pagar caras las consecuencias de su valentía. “[...] cuando me fui a casa, iba con mucho miedo, porque me dijeron que me estaban esperando en el camino [...] yo volteaba a todos lados y por momentos sentía que alguien me seguía, una camioneta atrás se pegó y se veían sospechosos [...] dije esto son!” Pero no pasó nada y siguió hasta su casa. Así ocurrió el primer susto.

Comenta que él no tiene ninguna arma, frente a otros que sí tienen armas hasta colgadas de las paredes. Así, su esposa relató alternadamente lo siguiente. Cuenta que a ella también le hablaron por teléfono para extorsionarla; se presentaron de la misma forma que con su esposo, que eran de tal banda etc.; le dijeron con palabras altisonantes que ya sabían dónde vivía, quiénes eran sus hijos, a qué hora salían, etc., y que si no les daba lo que pedían (1 millón de pesos) entonces los matarían a todos. De carácter fuerte como los terracalenteños, ella dice que también le dijo sus cosas, que ella “no se espantaría por cualquier pendejo que le hablara”. Después dijo que la persona siguió hablando y que al final ella asintió que vería la forma de darles el dinero, pero que no podía con tanto y tampoco lo podía conseguir en ese momento; que le dieran unos días. Así terminó el segundo encuentro. Lo platicó con su esposo y sus hijos y parece que llegaron a la conclusión de que quien los estaba extorsionando eran unas personas del pueblo que se dedican a vender droga. No se cómo resolvieron que ella tendría que ir a ver a una de estas personas del pueblo y decirle que por favor no siguiera molestando a ella y su familia, que ellos no les habían hecho nada y que le pedían que por favor los dejaran en paz.

Durante nuestra charla en su casa, narra que le contestaron a Estela que ellos no eran, que ellos respetaban a su familia y que no se metían con los del pueblo. Entonces les pidió ayuda y le propusieron que volviera a platicar con los extorsionadores y les dijera que sí les iba a dar el dinero, prestado de unas personas así y así [...] Que le dijeran el lugar donde querían que llevara el dinero, pero que ella no se los llevaría, que serían unas personas de la organización a la que supuestamente ellos pertenecían. La señora Estela comenta en tono alegre que cuando le volvieron a hablar los extorsionadores les dijo esto con mucha fuerza y

valentía, a lo cual se quedó mudo el extorsionador y ya no supo nada que decir, le colgó y no volvieron a hablarles al celular. Cuando les preguntamos si no tenían miedo, ellos contestaron ya alegres que sí pero que todo había salido bien. También les preguntamos por qué no recurrieron a la policía o al ejército, etc., a lo que contestaron que las municipales están coludidas con estos hechos, que no eran de fiar, que el ejército sí lo consideraron pero el problema es que va, investiga, posiblemente los agarra y luego se van del pueblo y ellos se quedan ahí, en su casa, en situación de profunda vulnerabilidad. Cabe señalar que las personas del mismo poblado que les ayudaron, son las mismas que venden droga en el pueblo y se les considera una célula importante que forma parte del cártel de la región.

Episodios como éstos parecen cotidianos en muchas regiones y localidades rurales o urbanas del México contemporáneo. Sin embargo, pocos estudios abordan el problema de cómo se construyen ordenes políticos, sociales y culturales donde el narcotráfico y la delincuencia organizada convive con las sociedades locales (Cfr. Epele, 2010; Mendoza, 2008). Regularmente se analizan las historias de los grandes cárteles y sus líderes, al mismo tiempo que se observan a los grupos ilegales por fuera de la sociedad, como agrupaciones que llegan a imponer su orden y deseos. Estas visiones exteriorizan la violencia del tejido social y desconectan sus relaciones con el poder y la legitimidad (Mendoza, 2008; Misse, 2006). Como he argumentado en varios trabajos (Maldonado, 2010a; 2010b), el problema del narcotráfico no puede comprenderse como una fuerza avasalladora que llega a ciertos lugares a imponer su voluntad, sin cierta aceptación o tolerancia, resistencia o negociación de las prácticas de producción, trasiego o consumo de drogas. Uno de los aspectos que más llama la atención del testimonio anterior es la manera en que se negocia la violencia y se construyen ciertas legitimidades del orden ilegal. Rastrear estas negociaciones y la forma en que producen un “orden informal” puede ayudarnos a comprender parte de la “naturaleza” de la violencia que México está experimentando. En este artículo pretendo reconstruir una especie de topografía de la violencia, dando cuenta de cómo determinados actores legales e ilegales han tejido y están hilvanando órdenes locales en algunas comunidades rurales, indígenas o ciudades del Estado de Michoacán. ¿Cómo se acepta o negocia, evade y confronta la violencia? ¿cuáles son los límites permitidos y qué aspectos son negociados o tolerados por parte de la población?

## **VIOLENCIA DE ESTADO Y ORDEN DEL CRIMEN.**

Es incuestionable que desde la aprobación del Presidente Calderón de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, los niveles de violencia aumentaron a grados sumamente preocupantes. Obviamente este hecho ha cambiando profundamente las relaciones sociales, formas de sociabilidad, expectativas de la gente, sus proyectos y normas de vida. Tanto el crimen organizado como el Estado mismo pretenden adquirir cierta legitimidad entre la sociedad para evitar ser vistos como fuerzas destructoras o agentes indeseables, a pesar de los daños causados. En medio de las luchas, enfrentamientos y complicidades, los actores

legales e ilegales se esfuerzan por tener aceptación social, recurriendo a diversas estrategias tanto discursivas como mediáticas de acercamiento a la sociedad.

Sin embargo, en el caso de Michoacán, la lucha de los cárteles regionales con el Estado es muy distinta a la confrontación con otros cárteles. Las divisiones entre crimen organizado y narcotráfico con el Estado pueden aparentar una lucha frontal, no obstante, un análisis más profundo parece enseñarnos que en realidad el asunto es más complejo debido a las “relaciones peligrosas” que se han tejido entre estos actores (Misse, 2006). El desarrollo y auge del narcotráfico se enraiza en una larga historia de formación de identidades regionales en los márgenes del Estado, en cuyo territorio geográfico se concentra la mayor parte del cultivo de droga vegetal y recientemente de droga sintética. Esto ha dado una fisonomía muy peculiar a la formación de los actores ilegales y también una calidad distinta con los agentes del Estado. Las disputas por el control del narcotráfico se tejen con fenómenos muy estrechos de lucha política, control territorial, pleitos agrarios y conservación de identidades, etc. El narcotráfico tiene un origen rural pero actualmente ya es muy transnacional por lo que no puede disociarse del Estado-nación. Luego de las famosas gavillas integradas por miembros masculinos de familias extensas que cultivaban y traficaban marihuana y goma de opio, sucedieron grupos más organizados en forma de cárteles para controlar la totalidad del negocio. Sin embargo, después de la fractura del cártel del Milenio o los Valencia sucedió otro grupo con características muy peculiares que parece organizarse por otro tipo de códigos. La Familia Michoacana representa el cártel que desafía más abiertamente el proyecto político y cultural del Estado pero articulado a poderes regionales institucionales del mismo. Esta agrupación hizo famosos los narco-mensajes destinados a sus rivales, a los cuerpos policiacos, al gobierno federal y aquellas personas que interfirieran en sus planes y negocios. También es la misma a la que se ha identificado como una organización con un fanatismo religioso exhibido en sus narcomensajes, reclutamiento y adiestramiento. Como reza uno de los más famosos mensajes: *“La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir. Sépalo toda la gente; esto es justicia divina”*<sup>3</sup>. Entre sus principales objetivos explícitos declara que cuidará de los michoacanos de cualquier grupo que pretenda entrar a Michoacán a imponer sus leyes, haciendo pasar por una organización protectora de la sociedad y desafiante del Estado, catalogado como corrupto y aliado a otros cárteles nacionales.

Es un hecho que dicha agrupación ha desafiado la legitimidad del Estado mexicano al reivindicar velar por la seguridad y suplirlo en tareas de orden social, recaudación de cuotas, organización de actividades legales e ilegales y en general algunas funciones de gobierno. El desafío al Estado parece mucho más grave de lo que se dice oficialmente, mientras que similarmente las redes que ligan complicidades mutuas son de una enorme preocupación. Exceptuando comentarios

---

3 En noviembre de 2006 la Familia Michoacana pagó a dos periódicos de Michoacán por dos desplegados en los que se podía leer este narcomensaje.

sobre los ámbitos más sofisticados de lavado de dinero, coalición de autoridades públicas con el crimen organizado, corrupción y elecciones, en las que el narcotráfico es muy difícil de reconstruir, a nivel de la sociedad la legitimidad política está seriamente cuestionada. Rumores van y vienen sobre la llamada delincuencia del Estado que se practica mediante la corrupción del erario público y las políticas públicas centradas en obras sociales como de seguridad., lo mismo que los vínculos con actores ilegales mediante protección.

Como consecuencia de lo anterior, en extensas regiones rurales se instalaron oficinas paralelas que regulan la producción, comercialización y venta de productos del campo a partir de un porcentaje. En el comercio formal privan los rumores sobre el cobro de ciertas cuotas para no atentar contra los establecimientos o ser motivo de extorsión o secuestro. En la organización del comercio informal-ilegal de extensas ciudades, el cobro de cuotas está supliendo o se alían a los corruptos líderes sindicales o funcionarios públicos que ordenan en comercio ambulante. Esto son sólo algunos ámbitos donde el problema de la legitimidad del Estado está en entredicho, ya sea porque no se puede garantizar ninguna seguridad a los ciudadanos, o porque el orden del crimen y el orden del Estado han llegado a imbricarse a tal grado que la violencia y la extorsión a la sociedad son una consecuencia de su grado de compenetración. En este escenario, suceden actos tales como la exhibición de personas que, supuestamente dedicadas a la delincuencia común, son forzadas a deambular por la vía pública con letreros frente o detrás del cuerpo, diciendo “soy ladrón”. La supuesta limpieza de delinquentes comunes en localidades rurales o urbanas y ciudades se generalizó como una de las acciones más llamativas por conservar la seguridad fuera del Estado. Hay casos donde realmente este tipo de acciones son meramente mediáticas, pero en otros la situación es más compleja, teniendo que intervenir agentes civiles o la iglesia para no atentar contra jóvenes presuntamente inocentes. En extensas regiones parece que el crimen organizado ya ha logrado construir ordenes informales que son reivindicados por sectores de la población. Por ejemplo, en una de mis charlas recientes con gente de Tierra Caliente, una pareja dedicada al comercio me comentaba abiertamente ante mi ausencia de la región que no debería tener miedo por ir a la zona; “ellos lo protegen, si uno no viene a causar problemas, ellos no le van a hacer nada; al contrario! Le ayudan [...] ellos no quieren que haiga problemas porque los federales y el ejército sólo vienen a chingar: roban, matan y hasta violan [...] por eso ellos quieren que las cosas estén tranquilas para que no pase nada... para que se vaya la policía. Si hay problemas, ellos los resuelven, andan vigilando que nadie ande haciendo chingaderas; si agarran a uno le va mal, porque no permiten que nadie ande haciendo problemas que llame la atención y haiga más vigilancia.” Este tipo de acciones nos habla de gobiernos paralelos e intentan proyectar y legitimar un tipo de orden social alternativo supuestamente más idóneo que el oficial. Frente a esta realidad, uno de los problemas que nos interesa aquí es la manera en que la gente está respondiendo a la violencia, negociándola o viviéndola simplemente en sus rutinas cotidianas.

## **SORTEANDO LA VIOLENCIA.**

Para sortear parte de la violencia, la población ha construido un conjunto significativo de estrategias para evitarla, tolerarla, negociarla o enfrentarla, dependiendo del estrato socioeconómico, vínculos de protección y lugar de residencia. Las acciones van desde actos individuales, colectivos y estrategias organizativas más o menos consistentes. Dichas estrategias forman parte de repertorios culturales construidos en la interacción cotidiana con las violencias. Las estrategias contra la violencia pueden distinguirse en función de las acciones colectivas como la migración interna (desplazamiento forzado) o movilidad residencial de gente de clase media y alta de ciudades michoacanas a otras ciudades o grandes metrópolis ante supuestas amenazas de extorsión, secuestro o pago de cuotas. La movilidad residencial representa una de las estrategias más recurrentes de personas con recursos económicos y redes familiares o de amistad para enfrentar la violencia. Estos casos contrastan con formas organizativas tales como las que están experimentando pueblos indígenas por recuperación de terrenos comunales y extracción o venta clandestina de minerales en medio de un ambiente profundamente inmerso en el narcotráfico.

### **A - Enfrentando la violencia cara a cara.**

Para los señores Ramiro y Estela de quienes hablamos al inicio de este artículo, el problema de la violencia en Tierra Caliente no tiene tantos años de que se suscitó tal como la están viviendo ahora. La señora Estela afirma categórica “[...] aquí la violencia es muy silenciosa y no se ve pero produce cosas muy feas”. Después de que nos comentaron la experiencia de extorsión y la manera en que tuvieron que recurrir a la célula de un cártel para evitar ser objeto de abusos, los señores narraron otras historias igualmente dramáticas de cómo se enfrenta y se trata la violencia en pueblos rurales inmersos en problemas de narcotráfico.

Cuando terminaron de contarnos la historia de extorsión, pronto vino a su mente la forma en que su nieto había fallecido meses antes de nuestro encuentro. Ellos asocian la muerte de su nieto al consumo de alcohol y de drogas sintéticas que en ese tiempo se estaban vendiendo en el poblado de manera indiscriminada a los jóvenes. Había cierta indignación del hecho de que este tipo de droga se consiguiera sin ninguna restricción y a pesar de los daños que estaban causando a los jóvenes del poblado. Este acto lo ligaron con su preocupación acerca de cómo estudiantes de un tecnológico cercano al poblado, van en taxi a comprar droga; “no se bajan, circulan despacio, intercambian la droga por dinero y luego el taxi se va. Así es todo el día [...]”. También nos comentaron que es “muy triste” que jóvenes muy chicos ya andan en “esas cosas” y cómo muchachitas son drogadas y luego violadas por sus mismos amigos y nadie sabe nada. Para ellos, este tipo de hechos se han generalizado en todo el poblado y la región. Hablan de jóvenes que se convierten en adictos y luego andan vagando como “loquitos” en el pueblo. Una de las cuestiones que más llama la atención es que detrás de estos hechos,

hay un estira y afloja entre algunos sectores de la población y el grupo que vende droga en el pueblo. Para nuestros informantes, como resultado de que el grupo se apoderara del suministro de droga en el mismo pueblo, de poblados aledaños y formara parte del poderoso cártel regional, de que comenzaran a haber problemas de accidentes automovilísticos, de jóvenes que drogados violan a sus mismas compañeras o resultaran embarazadas sin saber con certeza lo sucedido, etc., se generara una corriente de opinión sobre las consecuencias que estaban sufriendo los jóvenes del poblado producto del consumo de drogas sintéticas. Para ellos “lo que ahora se está vendiendo es la coca, el cristal ya no porque estaba causando mucho daño a la gente.” Según nuestros informantes, la gente del pueblo se comenzó a indignar con el grupo que suministra la droga. Al parecer, estos rumores llegaron a oídos de los corredores y según tomaron la decisión de cambiar el tipo de droga para no tener problemas con los vecinos. Parece que hubo reclamos públicos de algunos padres de familia debido a los problemas de violación de hijas adolescentes y porque comenzaron a haber investigaciones policiales sobre este tipo de hechos. Esta violencia silenciosa que no se ve pero que causa grandes desórdenes es el lado anverso de lo que nos dice el señor Ramiro: “la marihuana es como un dulce en la boca de los jóvenes”.

Estas formas de negociación de la violencia, cara a cara, es parte de la rutina que pueblos rurales están experimentando. Y no sólo de parte de grupos asociados al crimen organizado sino también de parte del Estado y sus aparatos. Nos ha comentado el mismo señor Ramiro, cuya versión igualmente corroboramos con otras personas del mismo lugar, los problemas que enfrentan regularmente cuando hay retenes militares o federales en las inmediaciones del pueblo, camino hacia las empresas extractoras de esencia y jugo de limón a las cuales les venden sus cosechas de limón. Jornadas largas y muy de mañana para evitar el calor de medio día hace que los campesinos se apresuren en el corte para transportarlas a las empresas que reciben el limón. Sin embargo, los retenes militares o federales regularmente les impiden llegar a dichas fábricas por la fila de camionetas. Uno de los problemas que esto causa es que en la medida en que los retenes retrasan demasiado el paso, las empresas extractoras o ya no reciben el limón o lo compran a muy bajo precio pues la cosecha no se puede quedar parada más de un día debido al calor del día. Esto ocasiona pérdidas a campesinos que van al día. La indignación es más alta contra las fuerzas militares conforme saben que ningún narcotraficante va a pasar por esos retenes. Los campesinos entonces construyen sus propias teorías de conspiración acerca de que lo único que pretende el gobierno es molestarlos y no dejarlos trabajar en paz. Nunca en ninguna parte de México he sentido y escuchado tanto desprecio al gobierno tal como lo he vivido en la Tierra Caliente.

En situaciones un tanto más peligrosas, los campesinos tienen que enfrentar la violencia de manera más directa. En la sierra, por ejemplo, los rancheros/campesinos han tenido que guardar un silencio absoluto ante la “invasión” de gente desconocida de la región para cultivar droga vegetal e instalar laboratorios

clandestinos de droga sintética en las cañadas o laderas de cerros de la sierra. Se dice que varios de ellos fueron desplazados forzosamente debido a esta situación, pero otros, los más numerosos, se han quedado a vivir en sus tierras, haciendo de la vista gorda de lo que pasa en las inmediaciones de sus ranchos. El silencio es la principal arma contra la violencia del crimen organizado como del Estado; su forma de negociar un pacto de no agresión. Igualmente sucede con vecinos que se atreven a sembrar droga en las inmediaciones de los poblados o permitir la instalación de laboratorios. Una especie de solidaridad forzada es lo que posibilita que el problema de narcotráfico no se vea como un asunto extraño o externo a las sociedades locales, cuando en realidad es una de las principales palancas que impulsa a sostener economías domésticas y regionales a partir de la construcción de obras, inversiones agrícolas, flujos de dinero circulante, etc. Este tipo de casos parece que ya se ha convertido en algo “natural” para los pobladores de la costa michoacana como en comunidades de Aquila o Lázaro Cárdenas y en particular Playa Azul, según pude conversar con un pescador, al decirme que la “Maña” o la Familia ya forma parte de sus rutinas cotidianas con el pago de cuotas por establecimientos, control de seguridad, etc. El orden local parece depender de un delicado equilibrio de las fuerzas del Estado y la delincuencia organizada.

El resultado más dramático de la violencia directa que se genera en localidades rurales o costeñas -ante la imposibilidad de afrontarla- es el desplazamiento forzado de familias, pobladores o personas de su lugar de origen a centros urbanos de la ciudad u otras ciudades. Sin embargo, al parecer muy escasamente lo hacen entre localidades rurales, aún cuando existan redes familiares y de amistad pues la violencia es de la misma magnitud e intensidad en las regiones que han sido capturadas por el narcotráfico. Nuevamente no sólo la violencia directa proviene del crimen organizado sino también de los aparatos de seguridad del Estado, e incluso he tenido testimonios que la manera en que utilizan la fuerza para cumplir algún objetivo es similar entre los actores legales e ilegales. Como quiera que sea, el desplazamiento forzado es una forma de afrontar esta violencia silenciosa o abierta. Desde que iniciaron las batallas contra el narcotráfico parece que el desplazamiento forzado adquirió su connotación verdadera, aunque antes ya se hablaba de familias que abandonaban sus hogares ante las olas de violencia, producto de las guerras entre los cárteles o por las incursiones del ejército en poblados rurales.

Los casos que más causaron preocupación en diversos medios periodísticos o instancias oficiales es el desplazamiento forzado de numerosas familias de comunidades rurales situadas en el Valle de Apatzingán cuando la ofensiva militar dio supuesta muerte a uno de los líderes más importantes de la organización La Familia Michoacana, alias el Chayo, en diciembre de 2010. Concentrados en la nunca certificada muerte de quiera fuera el líder más popular del cártel, medios periodísticos, sociedad civil e instituciones estatales, invisibilizaron los grandes problemas que acarrió el enfrentamiento armado como el desplazamiento de

familias de los poblados que quedaron en medio del fuego cruzado.<sup>4</sup> Numerosas familias se trasladaron hacia el centro de la ciudad de Apatzingán, mientras que otras prefirieron salir de la región en búsqueda de un lugar seguro. Aunque varias familias regresaron a sus hogares días después del enfrentamiento, según comentarios que obtuve vía indirecta de gente de la región, otras ya no regresaron, convirtiendo a la ciudad de Uruapan o Morelia su nuevo hogar mediante redes de amistad y familiares. El otro caso bastante documentado periódicamente fue el desplazamiento forzado de varios cientos de personas de localidades rurales pertenecientes al municipio de Buenavista Tomatlán, colindante con el municipio de Apatzingán y punto de cruce forzoso hacia la sierra madre del Sur. Producto de enfrentamientos armados entre bandas rivales, decenas de pobladores con familias completas se trasladaron al centro del municipio en busca seguridad. Continuos enfrentamientos ocurridos entre el 22 y el 25 de mayo de 2011 entre miembros de la Familia y Caballeros, provocaron que más de dos mil personas de siete poblaciones se desplazaran a la cabecera municipal de Buenavista y a Apatzingán. La mayoría de los desplazados fueron jornaleros agrícolas que trabajan como pizzadores de limón. “Se adelantó una guerra entre la gente de por allí, dijo un poblador; tuvimos que sacar a nuestras familias porque nomás se oían las balas en las paredes de palo que tenemos; estábamos nadamás con la voluntad de dios, dijo.”<sup>5</sup>

Las autoridades locales acondicionaron el auditorio y otros edificios para pernoctar por varios días mientras menguaba la guerra. Al parecer, algunos no querían regresar a sus hogares ante el temor de volver a repetirse los hechos, pero finalmente luego de varias semanas abandonaron las instalaciones preacondicionadas, volviendo a sus labores agrícolas o de servicios. Reconstruir las pautas de desplazamiento forzado es muy complicado en contextos rurales donde sólo puede entrar el ejército pero no gente extraña. Poblados como estos son similares a la localidad del Capulín de donde son los señores Ramiro y Estela, vigilados por gente aparentemente no haciendo nada, cuyo orden local depende de acuerdos basados en relaciones de parentesco, amistad o compadrazgo. El prestigio de una persona o familia es muy importante como para no ser sujeta a violencias cotidianas, e igualmente es fuente de diferendos entre personas en conflicto. En este municipio de Buenavista conocí de manera incidental a un narcotraficante relativamente poderoso que estaba al frente de la organización de los Zetas cuando en el año 2006 disputaban el control de las plazas de Michoacán. A mediados de diciembre del mismo año fue aprehendido por elementos de ejército y consignado. Fue un día en que se hizo la presentación de un libro al cual asistí y la persona en cuestión apareció repentinamente, se sentó entre las sillas a escuchar, la gente lo saludaba como cualquier persona, después nos invitó a cenar pero ya teníamos

---

4 En una acción inesperada para muchos, habitantes de Apatzingán salieron a las calles a manifestarse por la paz, pero terminaron rindiendo tributo a “El Chayo”. La gente salió a las calles con pancartas que decían: “Nazario, siempre vivirá en nuestro corazón”. La marcha a favor de la paz, se convirtió en un pésame y apoyo a La Familia.

5 [www.jornada.unam.mx/2001/05/26/política/015n1pol](http://www.jornada.unam.mx/2001/05/26/política/015n1pol)

que salir rumbo a Apatzingán a otra presentación y al despedirnos nos regaló una tarjeta para invitarnos a su balneario en las inmediaciones del poblado. Personas así son parte de la cotidianidad de estas regiones, aparentemente normales y amables, conocidas por la gente del pueblo pero sin que nadie diga nada al respecto en voz alta. Estos códigos son los que ayudan a la gente a sobrellevar la violencia potencial e incluso cuando hay enfrentamientos armados se puede correr la voz entre conicidos y familiares de que tienen que esconderse en sus casas, no salir o irse del pueblo según sea el caso. Este tipo de solidaridades forzadas son las que convierten al narcotráfico en algo cotidiano, parte del tejido social y sobre todo un medio de movilidad, relativa justicia local y prestigio.

## **B - Evadiendo la violencia en contextos urbanos.**

Las formas de enfrentar la violencia asociada al narcotráfico y la delincuencia organizada cambian dependiendo del estrato socioeconómico y el lugar de residencia. No es lo mismo enfrentar la violencia cara a cara en poblados rurales donde muchas veces el respeto depende de la valentía, que en contextos urbanos donde familias intentan evadir la violencia recurriendo a estrategias de cambio de itinerarios, evasión de puntos de conflicto, lugares concurridos, colonias oscuras o movilidad residencial permanente o temporal. Este parece ser uno de los fenómenos hasta ahora poco documentados sobre los resultados que está dejando la guerra antidrogas. No obstante, me parece que el desplamamiento forzado de familias en contextos rurales es menos regular que el desplazamiento de familias de clase media o alta en contextos urbanos.<sup>6</sup> Dicho de otra forma, enfrentar la violencia cara a cara no es un asunto de valentía machista, sino una forma de cuidar el patrimonio de la unidad doméstica, la tierra, el ganado, la herencia, etc., los medios básicos con los que las familias rurales se reproducen y sostienen. Ante este hecho, no es fácil desplazarse dejando abandonadas las tierras, el ganado y en general las prácticas culturales y sociales asociadas al ciclo reproductivo y festivo. En muchos casos, como hemos visto, las familias rancheras tienen que convivir forzosamente con grupos que llegan a la Sierra o inmediaciones de la Costa a cultivar droga o instalar laboratorios. El silencio es la principal arma para negociar la violencia, el desplazamiento o el asesinato.

Sin embargo, en contextos urbanos y principalmente entre miembros de clase media o alta, las formas de enfrentar la violencia se da sobre todo a partir de la movilidad residencial a otras ciudades, fenómeno conocido como desplazamiento forzado o interno. Durin plantea que hay distintas formas de nombrar a este fenómeno en las ciudades del Norte de México, donde en lugares como Monterrey, Nuevo León, en la frontera con Estados Unidos, se han generado verdaderos éxodos de empresarios, profesionistas y comerciantes conocidos como migrantes dorados (2012). A este respecto, documenta que según el reporte del Internal

---

6 Debo esta precisión al Dr. Esteban Barragán, especialista en sociedades rurales rancheras.

Displacement Monitoring Center [IDCM] se calcula que para el 2010 hubo cerca de 115 000 nuevos casos de desplazamientos internos. Los atribuye sobre todo a la huida de la población de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia otras regiones del país (2012: 33). Sin embargo, no hay documentación de los desplazamientos internos o forzados de otras ciudades que han sido igualmente presa de las luchas entre los cárteles y con el Estado. Para el caso de Monterrey, señala Durin, el éxodo de los regiomontanos a ciudades del Estado de Texas, EUA., se puede comparar, con base en información periodística, con el desplazamiento de disidentes castristas por el número de migrantes que Estados Unidos recibió con los brazos abiertos.

Es evidente que el desplazamiento forzado ha transformado radicalmente las ciudades fronterizas de México, impactando negativamente la economía y las relaciones sociales. Pero no son las únicas ciudades donde este fenómeno cobra realidad. El caso de Michoacán ocupa uno de los cinco lugares nacionales de mayor desplazamiento según el Centro de Monitoreo Noruego de Desplazamiento Forzado. En algunas ciudades michoacanas, la movilidad residencial se ha convertido en una de las opciones más socorridas para evadir la violencia, siendo uno de los fenómenos hasta ahora pocos documentados. Este hecho es muy significativo pues la forma en que la violencia se hizo presente en ciudades medias fue no sólo a través del narcotráfico y los enfrentamientos armados en las inmediaciones de las ciudades, sino sobre todo por medio de secuestros, extorsiones, etc. El aumento de secuestros y extorsiones provocó que familias optaran por trasladarse a ciudades relativamente más seguras o simplemente a donde nadie los conoce para evitar caer en manos de grupos ilegales. No hay cifras, sólo rumores e historias difundidas de persona a persona sobre que tal familia se fue de la ciudad por motivos desconocidos. Una estrategia muy regular es el uso de redes familiares y de amistad para evadir la violencia, pero también recursos económicos para afrontar gastos extraordinarios que implica la movilidad residencial. El desplazamiento forzado, si se quiere ver así a este fenómeno de movilidad residencial, sólo puede realizarse por personas que cuentan con los medios materiales, monetarios y humanos posibles para evadir alguna posible acción ilegal. En medio de estos rumores e historias también llama la atención la existencia de ciertos ciclos de movilidad residencial de acuerdo con los reajustes de los cárteles en el control de plazas, así como de pactos políticos (¿) establecidos para realizar prácticas de extorsión o no y de las propias reglas que los cárteles establezcan sobre la extorsión y el secuestro.

Pero es interesante notar cómo al interior de estas mismas clases medias y altas hay una especie de red nebulosa de amistades y complicidades o protección de la que no todos forman parte o tienen acceso. Por ejemplo, uno puede mirar a personas que son dueños de grandes negocios por los que supuestamente podrían ser objeto de alguna extorsión y, sin embargo, pareciera que no pasa nada. A diferencia de estos casos, hay personas que bien pueden igualarse en fortuna y tuvieron que salir de una ciudad en búsqueda de seguridad. También hay casos que contrastan diametralmente pues según rumores de la gente, comerciantes

o dueños de prósperos negocios en pequeño tuvieron que ser cerrados y alejados de la ciudad ante experiencias reales de secuestro. Estos casos se complejizan más cuando hay rumores de que tal persona, muy relacionada con familias de clases media o alta, está metido en el narcotráfico. O políticos también miembros de esas familias que supuestamente mantienen negocios ilícitos y amistades no muy claras bajo el amparo del poder político. Dichas relaciones peligrosas pueden explicar diferencias importantes sobre las prácticas de secuestro y extorsión, así como los pactos establecidos entre fracciones de clase que no son tocados por bandas de la delincuencia organizada. Cómo opera el crimen organizado en ciudades medias es un asunto muy interesante en función de alianzas, pactos o los negocios mismos que se entremezcan con las disputas de clase o prestigio. Una de las interpretaciones más populares sobre la selectividad de secuestros y extorsiones es el pago de cuotas a fin de no ser molestados. Puede ser verdad, no hay información al respecto, e incluso sobre versiones acerca de que los pagos se hacen a bandas para protegerlos no sólo de ellos mismos, sino además de bandas contrarias. El pago de cuotas para evitar ser objeto de extorsión y secuestro es una práctica al parecer generalizada, pero no igualitaria para todos ni con las mismas reglas. Ahora nos interesa abordar las formas de negociación de la violencia a través de acciones organizativas tales como algunos pueblos indígenas están llevando a cabo.

### **C - Enfrentando la violencia en territorio indígena.**

El caso de las comunidades indígenas representa otro ejemplo adecuado para reflexionar sobre las extensiones del crimen organizado en el orden local, la forma en que se ha tratado la violencia y la respuesta que experimentan las localidades indígenas ante la espesa trama de intereses y actores involucrados. Dos casos son centrales en este debate, el pueblo de Cherán ubicado en la Meseta Tarasca y la comunidad de Ostula del municipio de Aquila localizada en la Costa Michoacana. En el municipio de Aquila la violencia producto del narcotráfico y la delincuencia organizada es histórica. Su ubicación en la Costa lo ha convertido en un punto estratégico de entrada y salida de droga, cuyas pugnas por el control del cultivo, trasiego y venta cruzan líneas de identidad y etnicidad. Desde fines del siglo XIX, familias de rancheros se desplazan territorialmente de la Sierra a la Costa en búsqueda de mejores terrenos agrícolas, sosteniendo serios y violentos pleitos con fracciones del pueblo indígena quienes no permiten la venta, renta o usurpación de sus terrenos comunales (Gledhill, 2004). Éstos conflictos agrarios se han reproducido hasta la actualidad, pero cada vez más insertos en contextos de narcotráfico e intereses vinculados a otro tipo de ilegalidades. Cuando grupos de familias de rancheros impusieron su mayoría en ciertas localidades aliados con fracciones de indígenas, extensiones de terrenos comunales se cultivaron con droga a costa de pleitos con autoridades indígenas. De igual forma, las presiones de comunidades serranas y grupos aliados al narco transformaron las extensas tierras de la Sierra en un espacio idóneo para todo tipo de actividades ilegales. Al final, el

narcotráfico se convirtió en una actividad principal aportando dinero corriente o inversión para mantener en funcionamiento economías domésticas y regionales.

La supeditación del orden local a nuevos actores no ha sido fácil para este tipo de comunidades indígenas. El narcotráfico ha bordado un orden paralelo, mismo que se expresa en la debilidad de las instituciones estatales o su captura por parte de grupos ilegales asentados en el territorio. Desde fines de 2010, se suscitó un conflicto entre la empresa minera transnacional Ternium y la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, supuestamente por que la empresa extendió sus límites de explotación sin aviso y sin pago previo a la comunidad. El conflicto se prolongó varios meses paralizando las actividades económicas de la zona. El Ejército y la Policía Federal resguardaron las instalaciones cuando los comuneros mantenían cerradas las vías de acceso a la zona para impedir la salida de material y maquinaria pesada de la empresa. Las negociaciones se tornaron bastante ríspidas al no ceder ninguno de los actores involucrados. Ante ello, se difundieron versiones de que el crimen organizado entraría al conflicto para sacar el material minero y abastecer las necesidades de venta, o que cobraría un porcentaje de las negociaciones de los comuneros con la empresa. En efecto, los comuneros denunciaron la salida de varios camiones de la minera, al mismo tiempo que bloquearon las salidas<sup>7</sup>. Aún así, varios camiones comenzaron a sacar mineral del territorio de manera ilegal y abiertamente visible. Sucedieron así varios asesinatos, secuestros y desapariciones de gente ligada al movimiento indígena. Pese a manifestaciones públicas, solicitudes de auxilio al gobierno estatal y federal, el mineral seguía abasteciendo requerimientos de empresas transnacionales y exportándolo desde un puerto marítimo como el de Lázaro Cárdenas sin consultar su procedencia o posible clandestinidad. Aquí es claro que el Estado y el no Estado, es confuso. Las autoridades locales parecían no involucrarse en el conflicto, mientras que el crimen organizado actuaba detrás de las sombras del poder económico transnacional y aliado a los mestizos que reclamaban mayor seguridad y estabilidad. Es claro que enfrentar la violencia criminal de este tipo es muy riesgoso, sobre todo cuando la empresa y los cuerpos de seguridad del Estado parecen mantener el conflicto a expensas de un incremento de las violencias hacia la comunidad. La nulidad de pago por regalías de los dos años anteriores al estallamiento del conflicto, por parte de la empresa, volvió a reactivar el movimiento indígena contra la transnacional y acrecentar los conflictos con los mestizos, ya que desde principios de 2012 los comuneros se movilizaron para obtener cumplimiento de los acuerdos a costa de represión<sup>8</sup>. Experiencias de lucha de esta índole parecen reproducirse en otras comunidades indígenas del mismo municipio de Aquila. Antes de las elecciones del mes de noviembre de 2011 para renovar la gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales, la comunidad de Ostula se negaba a que los partidos

---

7 <http://www.jornada.unam.mx/2011/04/07/estados/036n2est>

8 <http://www.quadratindf.com.mx/Justicia/Detienen-en-Colima-a-5-lideres-indigenas-de-Aquila-Michoacan>

políticos hicieran proselitismo y dividieran a la comunidad. Rechazaron la injerencia en la vida interna comunitaria de organizaciones partidistas así como el trabajo electoral de Instituto Electoral de Michoacán. Ya en el 2009 habían practicado lo mismo, no se instalaron casillas electorales por conflictos con los pequeños propietarios del poblado La Placita. Ahora, la decisión se fundamenta por la graves condiciones de violencia e inexistencia de garantías en la región, comentan los comuneros. En el marco del Movimiento por la Paz que encabeza Sicilia, fue asesinado el comunero y activista de Ostula, Leiva, supuestamente por un grupo de 20 hombres armados. Las luchas indígenas han arrojado como saldo 5 desaparecidos y 30 personas asesinadas. Las notas periodísticas señalan que el Movimiento por la Paz tuvo dificultades para llegar a las comunidades de Ostula debido a la violencia generalizada en la región. La situación política previa a las elecciones estatales no era para menos, el rechazo a votar en el poblado se relaciona con los conflictos entre indígenas y mestizos envueltos por nexos con el narcotráfico. Así, se dijo, la participación en la elección de autoridades consistía en llevar a cabo su propia elección local por vía de usos y costumbres con el fin de “blindar” a sus autoridades de nexos con el crimen organizado. Al final, tras revocar la primera resolución de la Asamblea comunal, se volvió a votar porque sí se llevaran a cabo las elecciones, luego de presiones fuertes de los partidos políticos, el gobierno estatal como de otros actores invisibles en la arena pública local.

Aunque Ostula no pudo construir su propia forma de autonomía de gobierno comunal por medio de su rechazo al proceso electoral de noviembre de 2011, el caso del pueblo de Cherán ubicado en la Meseta Tarasca es un ejemplo de cómo la violencia criminal está generando acciones inéditas para combatirla. El conflicto parece haber detonado el 15 de abril a las 5 a.m., cuando transitaban por las calles de la comunidad varias camionetas que transportaban una carga considerable de madera que acababan de ser talada de forma ilegal. Al percatarse de este hecho ya consistente comuneros y comuneras alertaron a la población por lo que dichas camionetas fueron retenidas y sus ocupantes detenidos en flagrancia y resguardados en la iglesia, para posteriormente ser entregados al Ministerio Público Federal. De acuerdo con algunas versiones de comuneros dados a conocer a los medios periodísticos, a las 7 am aproximadamente, ingresaron a la comunidad una patrulla de la policía municipal acompañada de dos camionetas blancas con 14 hombres aproximadamente, los cuales se encontraban fuertemente armados. Estas personas comenzaron a disparar contra la gente, la mayoría logró escapar, pero resultó gravemente herido el señor Eugenio Sánchez Tehandón, a quien le dispararon en la cabeza. “Ante el ataque armado sufrido por la comunidad a manos de la policía municipal y del grupo de hombres, mismos que actuaron con la complacencia de las autoridades, la Comunidad de Cherán decidió cerrar el ingreso al pueblo, para proteger a la población de cualquier otra incursión armada, bloqueó las dos carreteras federales que lo circundan y declaró un “estado de sitio” para impedir que personas vinculadas al crimen organizado y a los talamontes ingresaran para agredirlos. La comunidad indígena comunal, cansada del saqueo

sistemático de madera de sus bosques comunales, decidieron poner freno a la tala clandestina. Ya varias veces lo habían hecho e incluso manteniendo pleitos con comunidades indígenas colindantes a sus bosques, pues personas de éstas fueron encontradas in fraganti con madera clandestina. Al parecer, la excesiva tala ilegal de sus bosques se hacía en directa alianza con el crimen organizado, quienes brindaban protección a los saqueadores de madera, amenazando, levantando o desapareciendo a quienes se interponían.

Desde el año de 2008 a la fecha han sido asesinados 9 comuneros de Cherán y se encuentran desaparecidos 5 comuneros más. Así, frente al saqueo sistemático de los bosques comunales y ante amenazas y desaparición de varios comuneros, el pueblo de Cherán puso freno a esta situación. Este es el principio de una serie de acciones que desembocarían en la instauración de un gobierno comunal. El bloqueo de los accesos principales y secundarios al poblado por parte de los habitantes y la revisión vehicular o personal se hizo con base en la organización “tradicional” del pueblo, pues el sistema de barrios de las fiestas sirvió como medio para construir un sistema de vigilancia a través de “fogatas” que se hacían diariamente por la noche en las esquinas de los barrios, y que era supervisado por los “principales” de los mismos. Así transcurrieron los días y meses, atrincherados ante supuestas amenazas del crimen organizado por atentar contra personas que habían desatado este tipo de acciones de vigilancia comunal. Por su parte, se destituyó la policía municipal por probables vínculos con bandas ilegales y se declaró al municipio un territorio bajo resguardo comunal. Se inculpó al presidente municipal de tener relaciones con el crimen organizado porque supuestamente no hizo nada para aprehender a los talamontes, señalándolo que recibía dinero sucio de la tala clandestina. Las solicitudes de auxilio de seguridad al gobierno estatal y federal oscilaron en medio de una completa ambigüedad, pues ni el ejército, la policía federal o estatal pudieron brindar garantías a los habitantes como a los bosques. Mientras tanto, los saqueos parecían aprovechar cualquier resquicio de seguridad para continuar con la tala ilegal. Se detuvieron algunos camiones de madera, incendiándolos y tomando como prisioneros a los conductores de los mismos; esta situación provocó otros problemas como la agudización de conflictos intercomunitarios con otras comunidades indígenas pues varios prisioneros eran originarios de éstas. En consecuencia, habitantes de la comunidad a la que pertenecen los prisioneros acusados de la tala ilegal de los bosques, también tomaron como rehenes a habitantes de Cherán, como una forma de presión para la liberación de sus vecinos. En medio de estos pleitos, el crimen organizado aparecía como la sombra de tales conflictos y diferencias. En otro municipio vecino de Cherán, se rumoraba que detrás de un conflicto entre comuneros y propietarios de una mina se hallaban inmiscuidos los tentáculos de organizaciones ilegales quienes protegían intereses particulares en detrimento de los intereses comunales.

En medio de las medidas de seguridad tomadas por la comunidad de Cherán, el conflicto intercomunitario y la tibia respuesta oficial se acercaron las elecciones para renovar los poderes públicos del estado de Michoacán, en noviembre

de 2011. Sin embargo, el proceso electoral generó una coyuntura muy importante. Antes de que el pueblo de Cherán se rebelara públicamente contra la tala ilegal de madera e instaurara el control de su territorio, desde hacía varios años atrás en el municipio se había experimentado una pugna muy enconada entre grupos políticos aliados a los principales partidos políticos. En la elección local de 2007 se generó un conflicto poselectoral serio. El priísta Roberto Bautista ganó la presidencia municipal con una diferencia de 76 votos frente a su contrincante de Alternativa, Leopoldo Urbina. Seis meses después éste candidato fue capturado y asesinado por una banda delictiva, lo que generó la toma de la alcaldía y frecuentes movilizaciones para exigir la destitución del alcalde. Urbina fue fundador del PRD en Cherán y exalcalde pero por conflictos internos no pudo obtener la candidatura por este partido, presentándose con las siglas de otra organización. Las pugnas intraelitistas e interpartidistas han normado gran parte de la vida política del municipio de Cherán. En los últimos años, los grupos políticos asociados a los partidos han tomado decisiones políticas que han afectado intereses ciudadanos importantes.

En este contexto, el movimiento cheranense contra la tala ilegal y el crimen organizado rechazó participar en las elecciones de noviembre de 2011 bajo el argumento de que los partidos han dividido a la comunidad y creado conflictos innecesarios. Para ellos, “los partidos sólo promueven el individualismo y separan a la gente, que olvida las formas de organización comunal a tal punto que hay peleas entre familias por tener diferente filiación política”.<sup>9</sup> La organización comunal que se había venido gestando desde abril del mismo año fortaleció la estructura barrial tradicional participativa e inclusiva que puso en entredicho las formas institucionales de expresión, así como un fuerte cuestionamiento de los partidos. En una acción inédita, en el mes de julio de 2011, el presidente municipal, el auxiliar jurídico y un regidor fueron retenidos en uno de los rondines que realizan miembros del movimiento y remitidos a la cárcel municipal, en donde supuestamente fueron amenazados a barrer la plaza principal. No es la primera vez que las pugnas con el presidente municipal derivan en conflictos serios. Por su parte, las nuevas generaciones de migrantes o profesionistas y activistas comunitarios surgieron como actores principales en la reivindicación de elegir autoridades con base en el método de usos y costumbres. En el marco de esta situación y ante la falta de intervención de los tres órdenes de gobierno para poner una posible solución a la situación que se vivía en éste municipio, la comunidad indígena de Cherán determinó el 5 de mayo del 2011, en asamblea general no tener más contacto con partidos políticos, por lo cual se optó que la elección del próximo presidente municipal se daría a través de “usos y costumbres propias de la región” y territorio P’urhépecha<sup>10</sup>. Bajo esta decisión, los habitantes de Cherán determinaron que no

---

9 <http://www.jornada.unam.mx/2011/09/28/estados/029n1est>

10 En junio del 2011, cuando comenzó formalmente el proceso electoral en Michoacán, los habitantes de Cherán pusieron sobre la mesa sus condiciones para que se realizaran elecciones en su comunidad: sólo se podrían instalar urnas si las autoridades detenían a quienes talaron el bosque,

dejarían instalar casillas para los comicios del 13 de noviembre en su comunidad.

Sin duda el proceso para llegar a tal determinación no fue fácil para la comunidad, quienes llevaron a cabo durante varios meses todo un proceso reorganizativo al interior, a fin de definir su nueva forma de gobierno comunal en esta nueva coyuntura electoral. Sin embargo, durante este proceso se suscitaron varios connatos de violencia, pues al interior de la comunidad había una división de quienes optaban por una elección por usos y costumbres, y por otro lado quienes optaban por las elecciones constitucionales bajo la postulación de “un candidato de unidad<sup>11</sup>”. Por otra parte, dicho proceso se vio obstaculizado durante algún tiempo por no contar con el apoyo y la aprobación de los habitantes de Santa Cruz Tanaco, tenencia del municipio de Cherán, quienes manifestaron su decisión de no participar en la elección por usos y costumbres.<sup>12</sup> Al mismo tiempo, los dirigentes de los partidos hacían sus propias estrategias para llevar a cabo la elección de autoridades municipales. A fines de octubre, el candidato del PRD/PRI/Anal/Convergencia/Ecologista, Antonio Tehandón se vio obligado a suspender un acto proselitista por las presiones del movimiento comunal que reclamaron infringir presuntos acuerdos en asamblea de realizar elecciones por usos y costumbres. Al impedir la realización del mitin, los comuneros le exigieron su renuncia a la candidatura que ostentaba. En medio de esta situación, pocos días antes de las elecciones estatales, el Tribunal Federal Electoral (Trife) resolvió positivamente el derecho de los cheranenses a elegir a sus autoridades aplicando sus propios sistemas normativos.<sup>13</sup>

El domingo 13 de noviembre se realizaron elecciones en el estado de Michoacán. En Cherán no se eligió a nadie. Ni siquiera se instalaron casillas. Ese día los habitantes marcharon para exigir que se hiciera la consulta de si el pueblo elegía autoridades por el método convencional de partidos o por usos y costumbres.

---

asesinaron y desaparecieron a los comuneros. Como no obtuvieron respuesta por parte de los distintos órdenes de gobierno, decidieron desterrar a los partidos políticos de su comunidad.

- 11 [www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=162044](http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=162044)
- 12 A raíz del inicio del conflicto en Cherán (abril de 2011), la comunidad de Santa Cruz Tanaco, tuvo un distanciamiento con la cabecera municipal, debido a que según los habitantes de Cherán, la tala clandestina es operada mediante la delincuencia organizada, pero sobretodo, aseguran que los integrantes de los grupos armados pertenecen a comunidades como Santa Cruz Tanaco y Capacuaro. Capacuaro pertenece al municipio de Uruapan y Santa Cruz Tanaco al de Cherán. Las dos comunidades purépechas, dedicadas a la fabricación de muebles y artesanías, ya no cuentan con recursos forestales, por lo que algunos habitantes extraen ilegalmente madera de sus vecinos, lo que ha ocasionado enfrentamientos entre comunidades. <http://www.jornada.unam.mx/2011/09/11/estados/031n2est>
- 13 “El 26 de agosto hicieron la petición formal al Instituto Electoral de Michoacán, para ejercer un gobierno electo según su derecho consuetudinario purépecha, pero éste lo rechazó. Esgrimiendo su derecho colectivo a la consulta, la comunidad no se conformó e interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el 2 de noviembre dio un fallo histórico cancelando el proceso electoral que debía llevarse a cabo el domingo 13 de noviembre y en su lugar ordenó al IEM consultar con base en la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos a Cherán, sobre qué tipo de organización quieren tener para conformar un nuevo gobierno”. <http://www.vanguardia.com.mx/asietemesesdelalucaencheransalidapartidospoliticosyrimenorganizadoelfruto-1149352.html>

Fue el domingo 22 de enero de 2012, cuando por primera vez en Michoacán un municipio indígena, exigió y ganó un juicio legal y electoral para ejercer su derecho a elegir autoridades comunales. Finalmente, el 22 de enero se celebraron las elecciones por usos y costumbres, aparentemente sin ningún conflicto. Varios días después volvió a surgir una nueva tensión entre comunidades indígenas porque al parecer los bosques de Cherán nuevamente fueron objeto de saqueo con saldos de camiones incendiados con madera, personas retenidas y brotes de violencia entre dos comunidades. Hay indicios de que nuevamente el crimen organizado ha entrado en escena para seguir apoyando a los talamontes. Por su parte, el nuevo gobierno comunal ha ejercido su propia seguridad pública con el nombramiento de sus policías, pero han seguido siendo atacados por el crimen organizado y taldando los montes. Se han realizado denuncias de ciertas personas probablemente vinculadas a la violencia pero extrañamente no se han girado órdenes de investigación. Veremos con el tiempo qué tanto sigue manteniéndose bajo control el problema de la delincuencia organizada, el saqueo y el narcotráfico que ya ha permeado gran parte de las comunidades indígenas.

## CONCLUSIONES

Los tres casos analizados de cómo la población está enfrentando o negociando la violencia asociada al narcotráfico y la delincuencia organizada nos brindan un panorama general acerca del ejercicio de la violencia y las respuestas que la gente está utilizando para evadirla, tolerarla o enfrentarla. Son respuestas diferenciadas en función de localizaciones geográficas y situaciones de clase como en relación con el estado. En primer lugar, quizá algo que ilustran estos casos es el hecho de que la violencia es un problema generalizado que se produce en medio de un juego de relaciones peligrosas entre el aparato público y el crimen organizado. Han sido las políticas de desmantelamiento del estado en lo referente a las poblaciones rurales lo que provocó que desde los años ochenta se acrecentara el cultivo y trasigo de droga en poblados del Sur de Michoacán, en medio restricciones migratorias, políticas prohibicionistas y escasa movilidad ocupacional de los sectores regionales. Las poblaciones rurales que quedaron fuera de los programas de asistencia y abandonados a su suerte, no sólo han tenido que enfrentarse a una mayor militarización del orden sino además con grandes estigmatizaciones, mientras que las políticas de seguridad local estuvieron destinadas a proteger los grandes intereses de agroindustrias y ricos empresarios. Este problema no sólo ha tenido un impacto desastroso tanto para las poblaciones rurales como para aquellos pueblos indígenas que viven del campo agrícola y de la explotación de sus recursos naturales. Similarmente, las clases medias han experimentado una enorme depauperización de sus trabajos y salarios o negocios que los ha puesto en dilemas serios sobre la manera de sostener sus estilos de vida. Una parte muy importante de la economía ilegal a través del lavado de dinero se concentra en este tipo de espacios por medio de redes de complicidad profundamente complejos. En este sentido, aún cuando la violencia actual parece producto de agentes

externos, en realidad es una consecuencia del deterioro de los órdenes sociales en que conviven diariamente los grupos sociales, donde la “banalidad del mal” en palabras de Arendt parece ser la forma de expresión de tal incertidumbre. Obviamente, aquí el problema de la militarización de las drogas y la delincuencia organizada tiende a acrecentar más problemas de lo que pretende resolver. Las estrategias de seguridad pública, entonces, parecen ser un medio para conservar un régimen de cosas que el Estado mismo ha consagrado como modelo de desarrollo por exclusión. La sociedad se asemeja a tipos de poblaciones gobernables por estrategias de seguridad llamadas de proximidad; es decir, disuadir el crimen y desalentar la delincuencia por medio de la presencia de la fuerza pública.

En segundo lugar, hemos visto que la construcción del orden local está dependiendo de un equilibrio complejo de grupos legales e ilegales a los cuales las personas tratan de ajustarse dependiendo de su ubicación geográfica, situaciones de clase y experiencia de organización o protección política. La negociación de la violencia cara a cara o guardando silencio; la evasión de la misma por medio de la movilidad residencial o la búsqueda de protección del crimen que no sólo los proteja a ellos mismos sino además de otras bandas rivales; y la acción colectiva de enfrentar el crimen y la indiferencia gubernamental que se está generando en poblados indígenas, instaurando sus propias autoridades y esquemas de seguridad comunal, forman parte de una serie de medidas que reflejan la construcción de órdenes que cuestionan la estrategia oficial. En el caso de poblados rurales y comunidades indígenas insertos en el narcotráfico, el problema del “Estado” y el “no Estado” es mucho más complejo. Parece que ya no sólo hay un Estado capturado por redes de poder que actúan detrás de las instituciones sino que ellos mismos se han convertido en aparatos capturados que actúan como depredadores similares a las empresas mineras o madereras en interacción con grupos criminales que brindan seguridad más eficiente. Lo más irónico, después de todo, es que las estructuras de poder que subyacen en el ejercicio de la violencia en ciertos lugares parecen inalterables y peligrosamente más arbitrarias en un mundo donde la impunidad parece ser la regla de sobrevivencia.

## GEOGRAFIA DA VIOLÊNCIA NO MÉXICO: ENFRENTAR O CRIME EM MEIO AO NARCOTRÁFICO E À DELINQUÊNCIA GENERALIZADA

### RESUMO

A guerra contra o narcotráfico que o governo do Partido da Ação Nacional empreende desde dezembro de 2006 até os dias de hoje no México tem como objetivo formal eliminar os cartéis da droga e reduzir a violência criminosa. No entanto,

apesar dos esforços, os problemas permanecem, e mesmo têm aumentado consideravelmente. Uma das áreas pouco investigadas da guerra ao tráfico é a maneira como sociedades ou comunidades locais inseridas nos problemas de violência e tráfico de drogas têm se reconfigurado. Analisam-se regularmente as histórias dos grandes cartéis e de seus líderes, retratando os grupos ilegais como exteriores à sociedade, à qual impõem sua ordem e vontade. O objetivo deste estudo é investigar a maneira em que a violência é negociada e como se enfrenta o crime em algumas comunidades rurais e indígenas e nas cidades de Michoacán. Documentar essas negociações e a maneira em que se produz a ordem local pode ajudar a entender parte da “natureza” da violência que o México está vivendo.

Palavras-chave: Guerra às drogas. Geografia da violência. Negociação. Ordem local. México

## GEOGRAPHY OF VIOLENCE IN MEXICO. FACING CRIME AMIDST DRUG TRAFFICKING AND THE GENERALIZATION OF VIOLENCE

### ABSTRACT

The formal objective of the war against drug trafficking that the National Action Party Government undertook since December 2006 to date was eliminating the drug cartels and reducing criminal violence in Mexico. However, despite the efforts, the problems remain and even increased considerably. One of the less investigated areas of this war on drugs is the way in which it has reconfigured local societies or the communities embedded in problems of drug trafficking and criminal violence. Regularly the stories of large cartels and their leaders are analyzed, in a way that depicts illegal groups outside of society, as groups that get to impose its order and desires. The objective of this study is to investigate the way in which violence is negotiated and confronts crime in some rural communities, indigenous and cities at Michoacán. Documenting these negotiations and the way in which local order is produced can help to understand part of the “nature” of violence presently experienced by Mexico.

Keywords: Drug wars. Geography of violence. Negotiation. Local order. Mexico.

### BIBLIOGRAFÍA

Arendt, Hanna (2008), *Sobre la violencia*, España, Alianza editorial.

Durin, Séverine (2012), “Los que la guerra desplazó: familias del noreste de México en el exilio”, en *Revista Desacatos*, Ciesas, núm. 38, enero-abril.

Epele, María (2010), *Sujetar por la herida. Una etnografía sobre drogas, pobreza y salud*, Buenos Aires, Argentina, editorial Paidós.

Maldonado Aranda, Salvador (2010<sup>a</sup>). *Los márgenes del estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán, Zamora, Michoacán: El Colegio de Michoacán.*

Maldonado Aranda, Salvador (2010b). "Globalización, territorios y drogas ilícitas. Experiencias latinoamericanas sobre México". En *Revista Estudios Sociológicos: El Colegio de México*, mayo-agosto de 2010, vol. XXVIII, número 83.

Mendoza Rockwell, Natalia (2008), *Conversaciones del desierto. Cultura, moral y tráfico de drogas*, México, D.F., CIDE, colección estudiantil.

Misse, Michael (2006), *Crime e violencia no Brasil contemporaneo. Estudos de sociologia do crime e da violencia urbana*. Río de Janeiro, Brasil, Editora Lumen Juris.